

CERTIFICACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN, dentro del proceso: SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA - 76001310500920240008400

Kiara Quiñones <kiarapaolaius@gmail.com>

Mar 19/03/2024 8:01

Para: Juzgado 09 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j09lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (238 KB)

CERTIFICACIÓN SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA .pdf;

Señores

Juzgado 009 Laboral del Circuito de Cali.

E. S. D.

Cordial saludo,

KIARA PAOLA QUIÑONES ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.073.665 de Cali-Valle, abogada en ejercicio, con tarjeta No. 343.416 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, me permito radicar mediante el presente correo electrónico CERTIFICACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN, dentro del proceso: SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA - 76001310500920240008400

Confirmar ACUSE RECIBIDO. Gracias.

De la Señora Juez,

Cordialmente

KIARA PAOLA QUIÑONES ORTIZ

Abogada

celular: 3152766626

correo [electrónico:kiarapaolaius@gmail.com](mailto:kiarapaolaius@gmail.com)

CERTIFICACIÓN NO. 053362024

La secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA

Que tal y como consta en el Acta No. 048-2024 del 13 de marzo de 2024 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del proceso bajo radicado No **76001310500920240008400** instaurado por el (la) ciudadano(a) **SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **52294596**, en, quien pretende: 1. Declarar la ineficacia del traslado de mi representada del régimen de prima media con prestación definida administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. 2. Así mismo, declarar la ineficacia de traslado de mi representada a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. CONDENATORIAS 1. Ordenar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a colocar a disposición de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES– todos los valores que reposan en su poder a título de cotizaciones, bonos pensionales y las cantidades adicionales con sus frutos, intereses o rendimientos. 2. Condenar a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES–, a recibir las cotizaciones realizadas por mi poderdante en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS todos los valores que reposan en su poder a título de cotizaciones, bonos pensionales y las cantidades adicionales con sus frutos, intereses o rendimientos. 3. Condenar a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., a todas aquellas pretensiones ultra y extra petita que el Despacho considere pertinentes. 4. Condenar a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., al pago de las costas, expensa, agencias en derecho y todo gasto procesal que se genere en el litigio., dicho órgano decidió :

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

Atendiendo a las particularidades del caso concreto, destáquese que la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA de conformidad con los dichos del escrito de demanda, estuvo afiliado inicialmente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en junio de 1998 hasta julio de 1998, posteriormente, efectúa su traslado a la entidad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A hasta junio de 2001, seguidamente decide trasladarse a la COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍA, entidad a la cual continuó cotizando, según consta en los escritos de la demanda, persistiendo su deseo en pertenecer al Régimen de Ahorro Individual.

La anterior situación permite concluir que la intensión de la demandante ha sido estar siempre afiliado al régimen de ahorro individual (RAIS), pues como se expuso en precedencia el actor experimento inicialmente el funcionamiento del régimen de ahorro individual al cual decidió retornar en 4 oportunidades más, cuyos traslados horizontales permiten dilucidar la comodidad de la actora en el régimen, sin perder de vista el hecho de que los traslados horizontales realizados por la actora posiblemente obedecieron a motivos económicos de acuerdo a las ventajas que le ofrecía una y otra AFP en cuanto a rendimientos y beneficios, lo que denota conocimiento y reflexión sobre las decisiones de la actora sobre la afiliación a sus fondos de pensiones tal como describe el origen de su ánimo de retornar al RPM, pues tuvo la oportunidad de contemplar la idea de retornar a Colpensiones y no lo hizo, contrario sensu efectuaba los traslados en entidades del Régimen de Ahorro individual.

En ese mismo sentido, es importante recalcar que la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA ha estado vinculada al régimen de ahorro individual por más de 20 años desde su afiliación o traslado inicial a través de la AFP PROTECCION S.A, y posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, tiempo durante el cual ha disfrutado de los beneficios del ahorro individual y en el cual cuenta actualmente con posibilidad de acceder a beneficio pensional.

Aunado a lo anterior tenemos que, al momento en que se expidió la Ley 100 de 1993, la demandante tenía la posibilidad de escoger cualquiera de los dos regímenes que fueron creados, resultando que con la suscripción del formulario en la entidad la demandante tomó la decisión de manera libre y espontánea de trasladarse al AFP PROTECCION S.A, y posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, entidad en la cual ha permanecido años, entendiendo así, su deseo de acogerse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

De ahí que, en el sub lite es la demandante quien debe acreditar que la información suministrada por la AFP del RAIS, fue equivocada o engañosa, situación que desde ya se advierte que no logra ser demostrada más allá de los dichos de la actora, pues por el contrario el error de la información no puede pregonar en este caso cuando la voluntad de la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA, contando con toda posibilidad de consulta y asesoría para determinar el fondo de pensiones que mejor le beneficiaría, sin que, por otro lado, años después, considere que la simple enunciación de que el valor de la mesada pensional varía entre los dos regímenes, sea motivo suficiente para acceder a las pretensiones del escrito de demanda, debido a que, conforme las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ambos regímenes pensionales concurren legalmente, enfatizando que si el accionante tenía dudas acerca de la información suministrada, debió acudir directamente a la entidad donde se encontraba afiliada para comparar cuál de los dos regímenes era el que más le beneficiaba, infiriendo que su desidia u omisión en aquel momento, en modo alguno puede considerar enmendar con el presente litigio, fundamentando que en la actualidad la información que se le comunicó fue engañosa.

Por otro lado, ese mismo artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal e, indica:

“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una

sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”;

En este contexto, para el 28 de septiembre de 2023 momento que la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA, decidió solicitar ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES el regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se encontraba imposibilitada legalmente mi representada para autorizar dicho traslado, toda vez que, de cara a la norma vigente, ya citada, y a la fecha de nació el 28 de mayo de 1976, y en la actualidad cuenta con 47 años de edad.

Así como se deduce de igual forma, que, para la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social, 1 de abril de 1994, no contaba con las 750 semanas de cotización equivalentes a 15 años de servicio, es decir, no era considerada como beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, beneficios transicionales que perdió con el traslado de régimen.

Al respecto, se ha pronunciado la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Pereira, en sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019), Radicación: 66001-31- 05-003-2017-00364-01. M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, para precisar lo siguiente:

“(…) ... la intelección que se continuará efectuando por esta Sala Mayoritaria es que si el afiliado es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100

de 1993 hay lugar analizar la ineficacia del traslado conforme a la tesis expuesta inicialmente por la CSJ, evento en el que se invierte la carga de la prueba a la AFP, quien debe acreditar que le suministró la información debida para que pudiera adoptar conscientemente la decisión de traslado, específicamente, en lo relacionado con la pérdida del régimen de transición.

Pero, en caso contrario, de no ser beneficiario actual de dicho régimen, debe estudiarse bajo la óptica de la nulidad del acto jurídico del traslado por vicios en el consentimiento, evento en el cual, le corresponde al afiliado acreditar los respectivos hechos de acuerdo con los Principios del Onus Probandi, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P., so pena de la improsperidad de sus pretensiones. (...)

De conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos es absoluta cuando se produce por un objeto o causa ilícita o por falta de las formalidades; mientras que cuando tiene un origen diverso como por ejemplo un vicio del consentimiento, sólo se genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato.

En cuanto a los vicios el consentimiento, según lo establece el artículo 1508 ibídem, lo son el error, la fuerza y el dolo.

El primero –error–, puede serlo de derecho y, de hecho, pero aquel no vicia el consentimiento, conforme lo plantea el artículo 1509. (...)

A su vez, el artículo 1750 del Código Civil prevé que para alegar la rescisión en los eventos en que se alegue la ocurrencia de error o dolo, se cuenta con un plazo de cuatro años contados desde el día de la celebración del acto o contrato.

De otro lado el artículo 1743 ibídem dispone que la nulidad relativa se sana por el paso del tiempo o por ratificación de las partes. (...)

Por otro lado, si en gracia de discusión su honorable Despacho considera que es procedente declarar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, debe tenerse en cuenta que la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA, al suscribir el formulario de afiliación con la AFP PROTECCION S.A, y posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS., declaró bajo la gravedad de juramento haber escogido el Régimen De Ahorro Individual Con Solidaridad de manera libre, espontánea y sin presiones, por lo que se infiere

que el traslado al RAIS se hizo bajo los parámetros establecidos en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, misma situación que se dio con la afiliación a la AFP PORVENIR S.A, de ahí que, le concierna a la actora demostrar que la información que se le suministró fue equivocada, con el propósito de obtener la declaración de ineficacia del aludido régimen pensional y posterior reconocimiento pensional, ello se afirma atendiendo a que la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA, realizó aportes desde el año 1995 hasta la actualidad, por las particularidades del sub lite, se entiende que debe ser la actora quien pruebe los fundamentos de facto del libelo gestor, toda vez que es una manifestación implícita de voluntad del afiliado.

Postura asumida en sentencia SL 413-2018 emanada del Sala de Casación Corte Suprema de Justicia, del veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018), Radicación N°52704 Magistrado Ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO:

De esta forma, la jurisprudencia de la Sala en distintas ocasiones ha dado preeminencia a la intención real del trabajador o afiliado en asuntos relativos al derecho de la seguridad social por encima de las formalidades. Así, por ejemplo, en punto al disfrute de la pensión de vejez, ha sostenido que si bien la regla general es la desafiliación formal del régimen, en determinados casos es dable derivar la intención del afiliado a partir del cese definitivo de las cotizaciones al sistema (SL5603-2016; SL 9036-2017; SL 15559-2017; SL 11005-2017; SL 11895-2017); también frente a la figura de la «aceptación tácita de la afiliación», consistente en que, cuando hay silencio de la administradora de pensiones con relación a las posibles deficiencias de la afiliación o vinculación y, al tiempo, esta recibe el pago de aportes por un período significativo, se da una manifestación implícita de voluntad del afiliado, que lleva a que no pueda perderse el derecho a la pensión, a pesar de la falta de diligenciamiento del formulario (SL 40531, 19 jul. 2011; SL 14263-2015). Como puede advertirse, en estas hipótesis se le ha dado un lugar preeminente a la realización de cotizaciones (afiliación tácita) o al cese de ellas (desafiliación tácita) como un claro reflejo de la intención del trabajador, más allá de la existencia del acto formal del diligenciamiento y entrega del formulario de vinculación o reporte de retiro. Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas

razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen. Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado. (negritas fuera de texto)

En cuanto a la presunta nulidad de la afiliación, las disposiciones jurídicas para resolver la Litis lo son por analogía las prescripciones del Código Civil, que indican verbigracia en el artículo 1741 del C.C., que la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos, cuando tiene un origen diverso del objeto o causa ilícita, como un vicio del consentimiento, sólo genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato, evento en el cual, se aplican los artículos 1502, 1508 y 1604 *Ibidem*; resultando perentorio el texto del artículo 1750 C.C., que a renglón seguido indica que el plazo para pedir la rescisión del contrato durará cuatro (4) años, así, si el traslado de la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA, tuvo efectividad en la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS., la acción rescisoria, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo, ya que, la presente acción sólo se vino a incoar años después de la suscripción del formulario a la AFP del RAIS; así:

“Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa: La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

Artículo 1750. Plazos para interponer la acción rescisión: El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.

Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.

A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo”.
(Subrayado fuera del texto original).

Lo anterior en aras de demostrar que ha quedado saneado con el tiempo las nulidades relativas que hubiesen podido surgir, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo y la prescripción de la acción rescisoria.

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, SL-17595 de 2017 con ponencia del Doctor Fernando Castillo Cadena, aplicable en este caso, independientemente de si el afiliado es beneficiario o no del régimen de transición, ha indicado que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz, cuando no media la libre escogencia, que sólo la habrá:

“cuando se proporcione la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica” para más adelante agregar que “Aquí y ahora, se recuerda que no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”. (Subrayado fuera del texto original).

Finalmente, y por lo antes expuesto, se trae a colación del Despacho, los postulados de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, así:

ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

q. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente ley.

ARTÍCULO 20. MONTO DE LAS COTIZACIONES. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La tasa de cotización continuará en el 13.5%* del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización

se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.

(...) En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.

Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se podrá trasladar recursos de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y sobrevivientes. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros Sociales y demás entidades administradoras de prima media, de manera que en ningún caso se puedan utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez para gastos administrativos u otros fines distintos a pagar pensiones.

Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993. (...)”. Negrillas propias.

Lo anterior, con el fin de solicitar al honorable Despacho, en el caso hipotético de considerar prósperas las pretensiones elevadas por la señora SONIA ISABEL RODRIGUEZ GUEVARA, en virtud de lo dispuesto en la norma vigente respecto del funcionamiento del sistema general en pensiones y en particular de la obtención de los costos de administración de las cotizaciones que efectúan los afiliados a dicho sistema en cualquiera de los regímenes dispuestos. Se solicita al Despacho se sirva ordenar a la AFP del RAIS que traslade con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, no solo el contenido de la cuenta de ahorro individual del actor con sus respectivos rendimientos, sino los costos de administración que fueron percibidos por esta última y que, al ser trasladados con destino a mi representada, ayudan a garantizar la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media quien no percibió por más de años ninguna comisión por la administración de los aportes del demandante.


Es importante tener en cuenta que la demandante basa su argumento señalando que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el que el pudiera elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer trayendo como consecuencia un perjuicio puntualmente en la Mesada pensional comparada con la que podría recibir en el RAIS, la acción que debió emprender es el resarcimiento de perjuicios, prescrita en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, así lo ha sostenido la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira en Sentencia del 2018-300 en la cual señaló:

“si el supuesto de hecho expuesto en la demanda se encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS, entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la

de resarcimiento de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o retorno al anterior, que es la consecuencia de salir adelante la ineficacia, que por el principio de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos”

Dado lo anterior, no debe existir ánimo conciliatorio, toda vez que se ha mostrado que la demandante se encuentra válidamente afiliado en el régimen de ahorro individual, dado que, la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS., vinculó a la demandante de manera correcta, respetando la norma para dicho momento, así mismo la actora se encuentra a menos de 10 años para acceder a su derecho pensional.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 14 días del mes de marzo de 2024.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Proyecto: LCRC